

La gran derecha

SEIS ex ministros y un ministro forman la enorme cabeza de un partido político que tiene más de alianza coyuntural que de otra cosa, que se llama Alianza Popular, sin que se vea claramente dónde está lo popular (hay precedentes: Acción Popular, de Gil-Robles, en la preguerra) y que va a representar la gran derecha española: una derecha que, procediendo en muchos casos del totalitarismo, del autoritarismo, tratan de adaptarse a una realidad parlamentaria que ven venir. Gonzalo Fernández de la Mora, teórico de los regímenes de fuerza; Manuel Fraga Iribarne, práctico del mismo sistema, reencuadrado por la derecha después de unas veleidades democráticas; Licio de la Fuente, franquista (en lo que no se distingue de todos los demás); Laureano López Rodó, socio del Opus Dei; Cruz Martínez Esteruelas, que fue en su Ministerio de Educación Nacional una revelación de intransigencia cuando se esperaba de él una ductilidad; Federico Silva Muñoz, que lleva años jugando a ser jefe de una democracia cris-

tiana que no cuaja, y, finalmente, Enrique Thomas de Carranza, ministrable y hombre de duras letras, son quizá gentes demasiado importantes todas ellas para que su alianza dure mucho.

Este partido ha emitido ya un largo manifiesto fundacional, que ha sido muy amablemente recibido por los medios oficiales. No parece, sin embargo, que debiera complacer al Gobierno actual, porque le quita un puesto político en la nación: el de la derecha parlamentaria. No se ve bien dónde va a encuadrarse don Adolfo Suárez y sus actuales ministros de cara a sus propias elecciones.

El manifiesto en sí es inexpressivo. Resulta un catálogo de los males de la Patria: aquellos males que estaban ya presentes o se estaban engendrando cuando los firmantes eran ministros y podían haberlos atajado en la raíz. O quizá no podían, y entonces no puede comprenderse bien cómo creen que ahora —cuando les toque— podrán. El manifiesto es más ampuloso y retórico que práctico, pero en su contenido hay las suficientes afirmaciones

de continuismo como para concretar que se trata de una busca de formas para un régimen antiguo.

Pero no hay que subestimar esta formación. Puede ser solamente un intento que se deshaga con tantas cabezas de león, pero puede ser también el gran partido de la derecha, de una derecha sin duda ajena a toda concesión que no le venga impuesta por la dinámica de la vida. Hay muchas personas en el país que mantienen puntos de vista similares a los expuestos por los autores del manifiesto, no en este mismo, que es pobre y poco imaginativo, sino en sus declaraciones personales. Con un centro que podría surgir de la democracia cristiana que no sigue al señor Silva Muñoz, con una izquierda representada por todo o parte de Coordinación Democrática, si ésta consigue vencer sus problemas interiores, darían al país una configuración política clásica. Con los apoyos que tiene este grupo, con los obstáculos que los poderes presentan a la oposición democrática, esta alianza podrá tener un buen



puesto en las elecciones Suárez. No representará la realidad nacional. La realidad nacional, hoy, no es fascista, y esta piel de cordero disfraza mal la piel de los siete lobos. Pero representa un sector que, claro, siempre debe estar representado, puesto que existe. Hasta que tenga libertad de pensar y comience a pensar de otra manera.

La televisión de todos

LAS "reformas" anunciadas para la programación de Televisión Española por el ministro señor Reguera Guajardo parecían anunciar una cierta penetración de la democracia en el medio masivo: desgraciadamente, con el tiempo ya transcurrido, puede advertirse que se sigue manipulando la información, quizá desde una técnica algo más moderna, pero ni siquiera lo suficientemente sutil para no ser advertida. Con una sinceridad que le honra, su director general, don Rafael Ansón, advirtió desde un principio que el medio pertenecía al Gobierno y estaba enteramente a su servicio, hasta tanto hubiese modificaciones de estructura política que recomendasen o determinasen otra actitud. Pero resulta que precisamente la manipulación de las informaciones y la selección de personas, ideas o palabras que aparecen en la pantalla van concretamente en contra de las modificaciones de estructura política. El problema que se está presentando para todos en la televisión es el de que no se limita a una emisión de opiniones o comentarios que fueran favorables al Gobierno, sino que está alterando la esencia misma de la información. Se ha com-

probado en temas tan trascendentales para el país como los asesinatos de las semanas pasadas y en el trabajo de selección de imágenes y textos del Consejo Nacional.

No es sólo la televisión la que forma el arsenal del Gobierno en el campo de la información. Está en la agencia oficial de noticias, EFE —y su paralela Cifra—, que dirige otro periodista de gran prestigio y numerosa audiencia, don Luis María Ansón —hermano del director general de Radio y Televisión—; está en la red de emisoras de Radio Nacional de España, en la Cadena de Radio del Movimiento y en la amplia serie de diarios y publicaciones del Movimiento. Se dice que estas últimas cadenas de radio y prensa pueden pasar a ser del INI, lo cual no modificaría sustancialmente la obediencia gubernamental de estos medios. Pero la prensa aún puede considerarse como afortunada, porque hay un número creciente de periódicos y revistas de información política que mantienen una independencia: en la televisión no hay emisoras privadas, y en la radio, por la actual ley, las numerosas emisoras privadas deben convertirse en simples por-

tales de Radio Nacional y no les está permitido una información propia, un comentario político propio.

Ningún otro país, a excepción de los claramente totalitarios, tiene entregados estos medios en manos de un Gobierno, ni siquiera de un Estado. Los diferentes estatutos en Occidente van desde la libertad de emisoras privadas (y, desde luego, la no posesión de periódicos oficiales) en la televisión y en la radio (en algunos países hay un monopolio estatal, pero garantizado por una mayor libertad de información, por el estatuto de los redactores y por la presencia de emisoras periféricas de radio y televisión) hasta la propiedad pública, con un Consejo rector formado por los distintos partidos.

El alcance de este predominio de la información, sobre todo a partir de la televisión, es tal que ni la más sincera ley electoral permitiría nunca el acceso a las asambleas de la oposición mientras la opinión pública estuviera mediata hasta ese extremo. El país cree hoy, por ejemplo, que el Gobierno ha tenido un éxito en la presentación del proyecto de reforma política ante el Consejo Nacional

del Movimiento, porque así se lo ha dicho la televisión: por este medio no se habrá podido enterar jamás de la hostilidad de la acogida al presidente Suárez, y menos aún del alcance de las enmiendas presentadas. Como nunca ha sabido enteramente qué es lo que pasó en San Sebastián cuando algunos elementos utilizaron para sembrar el terror un hecho tan doloroso y tan respetable como el entierro de las víctimas de un atentado.

Si a esto se le añaden las declaraciones ampliamente difundidas de que ahora la televisión "es distinta", los errores creados son aún mayores.

¿Cuál puede ser la solución? La de la prensa y la radio del Movimiento estaría en su entrega directa a unos Comités de Redacción o, mejor aún, a unas cooperativas del personal de cada uno de ellos.

La de la televisión exigiría un Consejo similar al que orgánicamente tiene ya establecido la agencia EFE, pero con operatividad y eficacia mayores: un Consejo donde estuvieran representadas las fuerzas políticas reales del país, que garantizase un equilibrio auténtico. ■